REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL HOY CINCUENTA Y UNO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	CONSTITUCIONAL (ACCIÓN DE TUTELA)
DEMANDANTE	HENRY CRUZ URIBE
DEMANDADOS	CLARO SOLUCIONES MOVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS
RADICADO	11001 40 03 069 2022 00038 00

Agotado el trámite establecido por la Ley se procede a emitir fallo dentro de la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

El señor HENRY CRUZ URIBE solicita la protección de su derecho fundamental al habeas Data que, afirma, le está siendo vulnerado CLARO SOLUCIONES MOVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS

En el escrito de tutela indica el accionante que el 20 de noviembre de 2021, vía correo electrónico envió derecho de petición a soluciones CLARO en el que solicita el retiro de las centrales de riesgo de la información negativa que aparece a su nombre por cuanto no le comunicaron con 20 días de antelación que lo iban a reportar.

Señala que si bien es cierto que el 17 de diciembre de 2021 recibió respuesta en la que le decían que para la obligación No. 1 14883987 no registraba contrato y, por tanto, procederían a eliminar la información negativa, lo cierto es que. a la fecha de presentación de esta acción, aún aparece en las centrales de riesgo su nombre.

Ante lo anotado pide que se proteja el derecho pedido en amparo y se ordene a las accionadas que en el término de 48 horas procedan a rectificar y actualizar la información negativa reportada a su nombre.

Solicita igualmente se ordene a las accionadas procedan a dar respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas.

TRÁMITE

Mediante auto calendarado 18 de enero del año que avanza se avocó conocimiento de la presente acción, se vinculó a EXPERIAN COLOMBIA S.A. y CIFIN S.A.S- TRANSUNION y se ordenó oficiar a las accionadas quienes dentro del término concedido contestaron en los siguientes términos.

La representante legal de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., como absorbente de TELMEX COLOMBIA S.A. informa que el 24 de mayo de 2017 el accionante adquirió la obligación 1.14883987 la cual presentó mora en el pago desde junio hasta noviembre de 2017 y el 25 de octubre de 2016 el servicio hogar 43397215 que también presentó mora en los meses de enero a marzo de 2017.

Aclara que, acorde con la respuesta favorable que le fue enviada al actor el 17 de diciembre de 2021, la información en las centrales de riesgo se encuentra actualizada, conforme lo establecen la Ley 1266 de 2008, Art. 13, y en la Sentencia C-1011 de 2008 de la Corte Constitucional pero que, acorde con la jurisprudencia constitucional esas entidades aplican los tiempos de caducidad correspondientes de los datos históricos que reposan en sus bases de datos, evento que escapa al control de COMCEL S.A.

Remite prueba documental, pantallazo. En la que se establece que, para el 20 de enero del año que avanza, con el número de cédula del accionante no se encontraron registros.

Señala que, contrario a lo afirmado por el demandante, el 2 de julio de 2017 vía empresa de mensajería, le remitieron comunicación de aviso a centrales de riesgo por la mora y allega guía de entrega de la misiva a la dirección física suministrada.

Termina solicitando se declare la improcedencia de la acción por hecho superado.

El apoderado de EXPERIAN COLOMBIA S.A. después de citar las leyes 1266 de 2008 y la 2157 de 2021 señala que los datos negativos que aparecen a nombre del accionante fueron reportados por CLARO SOLUCIONES MÓVILES y CLARO SOLUCIONES FIJAS y que, para el 19 de enero de 2022, no había sido actualizados por las empresas citadas.

Indica que esa entidad no puede proceder a la eliminación del dato negativo puesto que es una situación actual de falta de pago de las obligaciones, tal y como se registra en la historia de crédito la cual se encuentra acorde con la información proporcionada por CLARO SOLUCIONES MÓVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS pero que, una vez sean canceladas por el titular, su historial de crédito indicará que la obligación ha sido satisfecha.

Informa que no obstante el pago por el titular, el dato sobre la mora quedará registrado por un término máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de extinción de tal obligación, siempre que ocurra durante el primer año de vigencia de la Ley 2157 de 2021 pero que si es con posterioridad el pago, el dato negativo permanecerá reportado por el doble del tiempo que dure el incumplimiento en que incurra la parte deudora, sin que supere cuatro años, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008.

Termina indicando que la acción no está llamada a prosperar habida consideración que el término de caducidad previsto en la Ley estatutaria de Hábeas Data y en la jurisprudencia constitucional, no puede convertirse en un mecanismo que conlleve al desconocimiento del supuesto fáctico de la obligación objeto de reclamo.

El representante legal de TRANSUNIÓN S.A.-CIFIN S.A.S., después de explicar el rol de esos bancos de datos, adujo que conforme a lo establecido en los arts. 8, 12 de la Ley 1266 de 2008 no son responsables de los datos que les son reportados por las fuentes de información, como tampoco de hacer el aviso previo al reporte negativo y recuerda que las fuentes son las encargadas que los datos sean veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables; razones suficientes, dice, para que la entidad que representa no sea condenada en este asunto. En relación con el actor señalan que los datos que allí reposan

fueron enviados por CLARO SOLUCIONES MÓVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS y que ellos no se encuentran autorizados para eliminarlos.

Termina señalando que la entidad que la fuente, CLARO SOLUCIONES MÓVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS para el 19 de enero del año que avanza no ha reportado a la entidad que representa la fecha de extinción de las obligaciones o de exigibilidad y, por tanto, no le es posible proceder a la aplicación de un término de permanencia de la información negativa.

Ante la respuesta enviada por CLARO SOLUCIONES MÓVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS el Despacho intentó comunicarse en varias ocasiones con el accionante sin que fuera posible.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela, prevista por el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo procesal específico y directo, cuyo objeto consiste en la efectiva protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales en una determinada situación jurídica, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, o de un particular en las situaciones y bajo las condiciones determinadas específicamente en el Decreto 2591 de 1991. La finalidad última de esta acción constitucional es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que la amenaza que sobre él se cierne se configure cuyas características primordiales son la inmediatez y la subsidiaridad.

Deviene de lo anterior, determinados criterios que rigen su estructuración como derecho fundamental, y consecuente alcance, para ser objeto de protección por vía de tutela, ellos son: la subsidiariedad y la inmediatez. Lo primero, porque únicamente puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa judicial o que, teniéndolo, acude a la tutela para conjurar la situación de perjuicio irremediable en la que se halla. Lo segundo, su inmediatez, por cuanto que es un mecanismo que opera de manera urgente, rápida y eficaz para proteger el derecho fundamental que ha sido vulnerado o que se encuentra amenazado.

De igual forma, hay que aclarar que la naturaleza de la acción de tutela es subsidiaria, es decir, es improcedente siempre que existan otros mecanismos de defensa judicial, a no ser que sea utilizada como mecanismo transitorio de amparo cuando se trate de un perjuicio irremediable.

En este sentido, la Corte Constitucional manifestó:

"No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales..." "...ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en ordena la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales..." "...concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente..." (Sentencia C-543 de 1992, M.P. Dr. José Gregorio Hernández).

Por tanto, acorde con los lineamientos constitucionales es claro que la acción de tutela fue concebida como una institución procesal dirigida a garantizar “una protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales fundamentales”, siendo evidente entonces que no puede ser usada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos puede desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. Por tanto, este carácter subsidiario impone a la persona la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales y solamente ha establecido dos excepciones al principio de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) la primera, está consignada en el propio artículo 86 Constitucional al indicar que aun cuando existan otros medios de defensa judicial, la tutela es procedente si con ella se pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. (ii) La segunda, prevista en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, también lo es que procede la acción de tutela cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo, ni eficaz para la protección inmediata y plena de los derechos fundamentales en juego, caso en el cual opera como mecanismo definitivo de protección.

En cuanto tiene que ver con el perjuicio irremediable ha partido la jurisprudencia constitucional de que la persona cuenta con un medio idóneo y eficaz para la defensa de sus derechos fundamentales, pero que, con miras a evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la tutela se convierte en un mecanismo procedente para brindarle la protección transitoria a sus derechos fundamentales hasta tanto el juez natural resuelve el caso.

Evidentemente, son la urgencia y la gravedad las que establecen la impostergabilidad la acción de tutela habida consideración que, tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad ya que, de no ser así, se corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna, la decisión tutelar tiene sentido por cuanto urge la protección inmediata e inaplazable, sea en forma permanente o como mecanismo transitorio.

Ahora bien, con respecto al habeas data, el artículo 15 de la Constitución Nacional proclama que todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar, al buen nombre y el Estado debe respetarlos, igualmente tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan sido recogidas sobre ella en bancos de datos, ya sea en entidades públicas o particulares. El derecho a la intimidad no impide o prohíbe el igualmente derecho a obtener información personal, la que tan sólo puede ser recopilada para fines determinados y la cual debe ser veraz, exacta y actualizada, sin que dé lugar a confusiones.

Igualmente, prevé el numeral 6 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, como requisito de procedibilidad del mecanismo interpuesto que el actor haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, con el objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o la información que ha sido reportada a las bases de datos. Del mismo modo, el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 que “… en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente”

dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida.” (Subraya el Despacho).

De otro lado, en lo que concierne al derecho de petición, el art. 23 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Dentro del abundante desarrollo jurisprudencial que ha tenido este derecho, se han decantado, en forma general, los siguientes requisitos y presupuestos:

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

Por su parte, el artículo 32 de la ley 1755 de 2015 consagra que:

“Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título. Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.”

Hechas las precisiones que preceden, entra el Despacho a resolver.

PROBLEMA JURÍDICO Y CASO CONCRETO.

En el presente asunto se observa que el accionante, persigue la salvaguarda de sus derechos fundamentales al habeas data y de petición los cuales, afirma, le están siendo vulnerados por las accionadas al mantener en las centrales de riesgo información negativa sin que se le haya comunicado con 20 días de antelación y que iban a proceder a remitir a esas entidades tal situación.

Igualmente, porque si bien recibió respuesta de las demandadas en la que se le indicó que procederían a actualizar la información, para el momento de la presentación de la acción no lo habían hecho.

Las accionadas, por intermedio de su representante legal, señalan que, teniendo en cuenta la respuesta favorable enviada al accionante, procedieron a realizar los ajustes y las gestiones necesarias para eliminar los reportes en las centrales de riesgo TRANSUNIÓ-CIFIN S.A.S y EXPIRIAN COLOMBIA S.A.

Para demostrar la eliminación de los reportes negativos aportan prueba documental, pantallazo, de la que se establece que, para el 20 de enero del año que avanza, con el número de cédula del accionante no se encontraron registros, documento al que se le dio traslado intentó comunicarse en varias oportunidades con el actor para corroborar tal afirmación sin que hubiera sido posible; razón por la cual el juzgado, en aplicación al principio de la buena fe, le da pleno valor probatorio.

Aclaran que, contrario a lo afirmado por el actor, si le dieron aviso del reporte negativo que iban a enviar a los bancos de datos por la mora en el pago de las obligaciones que tenía.

Ahora bien, al revisar la respuesta se encuentra que cumple con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional pues, guarda relación con lo solicitado pues si bien, acorde con las centrales de riesgo TRANSUNIÓN-FICIN S.A.S. y EXPIRIAN COLOMBIA S.A. para el 19 de enero de 2022 seguía en sus bases de datos la información negativa suministrada por CLARO SOLUCIONES MOVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS lo cierto es que, para el día siguiente, 20 de enero, las empresas citadas ya habían actualizado la información y con las pruebas allegadas, se concluye que con el número de cédula del demandante no aparece información negativa.

Conforme a las situaciones arriba narradas es evidente que nos encontramos ante un hecho superado desde antes de presentarse esta acción Constitucional.

La Corte Constitucional en sentencia T-467 al respecto dijo:

“Así las cosas, la eficacia de la acción de tutela reside en el deber que tiene el juez, si encuentra vulnerado o amenazado el derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.

Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la violación o amenaza ya ha sido superada, es decir, la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el instrumento constitucional – acción de tutela– pierde eficacia y por tanto, su razón de ser. En estas condiciones la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener y el proceso carecería de objeto, resultando improcedente la tutela; efectivamente desaparece el supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución Política –la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”. (Subrayado fuera de texto).

De lo anterior se tiene que no hay actualmente vulneración al derecho pedido en amparo por lo cual se declarará la carencia actual de objeto en atención a que como instrumento constitucional de defensa del derecho fundamental que se dijo fue conculcado perdió su razón de ser, resultando ineficaz, ante la inexistencia actual de omisión por parte de la accionada en tutela.

Por esta razón y en virtud que la potencial orden por vía de tutela recaería sobre el mismo pedimento que ya fue contestado y resuelto por las pasivas CLARO SOLUCIONES MOVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS, no tiene sentido

emitirla pues resultaría desde todo punto de vista inocua, en razón a que desaparecieron los hechos que originaron la acción impetrada.

Por último, teniendo en cuenta las respuestas enviadas por TRANSUNIÓN-CIFIN S.A.S. y EXPIRIAN COLOMBIA S.A. y las normas que rigen el derecho al habeas data, se desvincularan de esta acción Constitucional.

Sin más consideraciones, el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal, hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto en el asunto de la referencia por existir hecho superado con respecto a CLARO SOLUCIONES MOVILES Y CLARO SOLUCIONES FIJAS, con fundamento en las razones anotadas anteriormente.

SEGUNDO: DESVINCULAR de esta acción a TRANSUNIÓN-CIFIN S.A.S. y EXPIRIAN COLOMBIA S.A.

TERCERO: ORDENAR que por secretaría se libren las comunicaciones a que se refiere el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En la oportunidad legal correspondiente, por secretaria envíese el expediente a la ilustrada Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos del artículo 31 del decreto 2591 de 1991, en caso de no ser impugnada.

Notifíquese y cúmplase,